

Cataluña no frena el crecimiento

■ M. C.

La crisis política catalana no frena el crecimiento económico español, por lo menos de momento. Eso es lo que opina la Comisión Económica Europea, que en sus últimas previsiones ha elevado el crecimiento económico de España una décima, hasta el 2,6%. “Aunque los efectos sobre el crecimiento de los eventos recientes en Cataluña permanecen contenidos, futuros acontecimientos pueden tener todavía un impacto, cuyo tamaño no puede anticiparse en este momento”, indica el ejecutivo comunitario en estas previsiones invernales. Además, el departamento dirigido por el comisario de Asuntos Económicos, **Pierre Moscovici**, calcula que 2017 terminó con un avance del PIB del 3,1% y espera que en 2019 el crecimiento económico se modere hasta el 2,1%.

Y es que a pesar de la inestabilidad política y del gran número de empresas que han sacado su sede social de Cataluña, el *procés* tampoco estaría afectando significativamente a esa comunidad. Eso es lo que refleja la estimación difundida el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat, en manos del equipo del ministro **Cristóbal Montoro** desde el mes de octubre. Así, la economía catalana habría crecido un 3,4% en 2017, una décima menos que en 2016 y 2015. Y concretamente en



P. Moscovici.

EUROPA PRESS

“La economía catalana habría crecido un 3,4% en 2017, una décima menos que en 2016 y 2015, según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y la Conselleria de Hacienda de la Generalitat”

“Montoro ya ha pedido apoyos para que, si no se pueden aprobar los Presupuestos, ‘al menos’ se puedan convalidar los decretos ley con los que el Gobierno aprobaría ‘medidas urgentes’”

el último trimestre el crecimiento fue del 0,8%, igual que entre julio y septiembre, justo antes del

referéndum del 1 de octubre. Por tanto, el crecimiento de la economía catalana para el global del año se situó tres décimas por encima del conjunto de España y un punto por encima de la media de la zona euro.

El gobernador del Banco de España, **Luis María Linde**, ya alertaba hace unos días de que “si en los próximos meses se alcanza una normalización, entendiendo por normalización una situación en la que los agentes políticos actúan con auténtico respeto a todo nuestro marco legal”, España se conducirá, “muy probablemente, a un mejor escenario de crecimiento que el que hemos considerado en las últimas proyecciones y a un impacto, finalmente, moderado”. “Si, por el contrario, esa normalización no se produce, ello puede afectar de modo más pronunciado al consumo y a la inversión”, alertaba Linde, pero, “sobre todo, puede afectar a la

inversión empresarial en Cataluña, dado que el entorno de incertidumbre retrasaría la realización de nuevos proyectos de inversión y postergaría las decisiones de contratación”, así como al turismo y la inversión extranjera. “El resultado sería un impacto negativo más elevado sobre la actividad tanto en Cataluña, como en el conjunto de la economía española”. El Banco de España es algo más pesimista que la Comisión en sus previsiones de crecimiento. Para 2018, estima un aumento del PIB del 2,4% y, para 2019, del 2,1%. Unas previsiones que, por cierto, coinciden con el FMI liderado por **Christine Lagarde**.

Pero si la situación catalana no está afectando al crecimiento, si que está poniendo en peligro la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El PNV de **Iñigo Urkullu** ha dejado bien claro que hasta que no se normalice la situación política en Cataluña y se retire el 155 no dará su visto bueno, indispensable, para las cuentas públicas. Y la semana pasada Montoro ya estaba pidiendo el apoyo del Congreso para que, si no se pueden aprobar las cuentas, “al menos” se puedan convalidar los decretos ley con los que el Gobierno aprobaría “medidas urgentes”. Por el momento, el Gobierno pretende dejar las cuentas listas en marzo, para que tras ser aprobadas por las Cortes, entren en vigor en el mes de junio. Pero para eso tiene que haber un gobierno en Cataluña, y uno que respete el marco constitucional,

que evite la repetición electoral.

En cualquier caso, España estaría siguiendo a rajatabla la tendencia general europea, según las previsiones que ha dibujado la Comisión. Moscovici, ante los medios, dejó claro que “el crecimiento ha vuelto”, por eso la mejora de las previsiones repercute en el conjunto de la UE, que ven crecer de 2,1% al 2,3% el pronóstico de la Comisión respecto a los datos de noviembre. El comisario de Asuntos Económicos ha subrayado además que esta previsión es susceptible incluso de mejorar.

Sobre España, la Comisión Europea destaca el “sólido impulso” registrado en el tercer trimestre de 2017 (del 0,8%), gracias al consumo privado, a la “boyante” inversión en equipo y la contribución “positiva pero decreciente” de las exportaciones netas. En el último trimestre, se frenó ligeramente hasta el 0,7%.

Respecto al desempleo, Bruselas señala que existen “señales contradictorias” en datos de paro por las diferencias entre el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo y la Encuesta de Población Activa (EPA). “Los indicadores del mercado laboral muestran señales contradictorias, con datos de empleo administrativo con una proyección más positiva que la encuesta de población activa”, afirma la Comisión. Finalmente, Bruselas estima que la inflación aumente de nuevo en la primera mitad de este año antes de recobrar una tendencia descendente a finales de 2018, debido a los efectos de base del precio del petróleo, para registrar una media anual del 1,6%.

Crónica mundana

La política ambiental no es una broma

■ Manuel Espín

El futuro de la economía del carbón es un tema que genera polémicas, también en España. El ministro **Álvaro Nadal** no parece decidido a cerrar las plantas de carbón a las que algunas eléctricas quieren dar carpetazo. La minería del carbón no es sólo un tema energético o económico (y medioambiental por su elevada incidencia en la producción de gases contaminantes), sino también laboral y humano: hay comarcas donde la minería ha sido tradicionalmente un sector clave, como en Asturias, León, Palencia o Teruel, donde el cierre de las explotaciones puede provocar una crisis social. Pero se trata de una actividad cada vez más obsoleta y condenada. En días pasados, un conservador inteligente y anti *Brexit* como **John Gunner**, presidente del **Comité de Cambio Climático de Reino Unido (RU)**, ministro de Medio Ambiente durante 16 años y miembro de la **Cámara de los Lores**, afirmaba en Madrid: “El carbón es un combustible caduco; España se debe centrar en la solar y la eólica”. La UE se comprometió a reducir el 40% de gases que contribuyen al efecto invernadero en 2030 (RU lo quiere hacer antes). La influencia del carbón es decisiva en la generación de ese impacto. De manera casi paralela al ministerio, el presidente de **Asturias, Javier Fernández** (PSOE) se mostraba sorprendentemente a favor de la *amnistía* a esa minería. Ante esta



Mina de carbón en la provincia de León.

“La ‘amnistía’ al carbón impedirá cumplir en 2030 el objetivo de reducir el 40% de gases que provocan el efecto invernadero”

“Una agricultura no sostenible es una amenaza para los intereses de todos, y no sólo los medioambientales”

situación parecen confundirse los términos: la *condena* al carbón debe realizarse a la par de un programa con fuertes inversiones para reindustrializar las comarcas mineras y generar nuevas actividades y expectativas de empleo para sus trabajadores, sin

convertirlos en dependientes subsidiados, a la vez que se debe impedir que esas zonas, muchas de ellas de montaña, queden deshabitadas. La mejor manera de ayudar a los mineros y a sus familias es generar empleo e inversión alternativa. Un asunto que debe ser abordado progresivamente para evitar un trauma laboral y social. Prorrogar artificialmente la vida del carbón es una mala decisión. Ese itinerario lo sigue **Trump**, que quiere volver a abrir explotaciones carboníferas, y el del gobierno ultraderechista de **Polonia**, que trata de halagar con medidas populistas las decisiones de Bruselas. El negacionismo de Trump y otros representantes que tratan de minusvalorar o negar las consecuencias del cambio climático y se desvinculan del **Acuerdo de París** sobre el clima,

da prioridad a intereses temporales y concretos, frente a los retos medioambientales, inexcusables.

Nos encontramos, por lo tanto, con responsables políticos (de ideologías muy distintas, hay que reconocerlo) para quienes la política ambiental se traza con el lápiz de la retórica y los buenos deseos, sin base alguna, confundiendo intenciones con realidades. Considerando la política ambiental un adorno vacío de contenido, y sin que se adopten verdaderas decisiones por miedo a enfrentarse con sectores influyentes o con arraigo. No sólo Javier Fernández apuesta por mantener el carbón en Asturias. En el otro extremo del mapa, **Murcia** tiene un problema fundamental con su principal joya natural, el **Mar Menor**, víctima de un cúmulo de políticas desastrosas traducidas en una visión cortoplacista, de parches, mientras la gran laguna salada está amenazada de muerte biológica si no se toman medidas. La Asamblea de esa Comunidad aprobó hace pocas fechas una ley para la recuperación del Mar Menor que implica la adopción de actuaciones fiscalizadoras sobre una agricultura que aporta muchos recursos a la región, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, y el contrario del PP. El gobierno de este partido, de la mano de su presidente **López Miras** —en una actitud comparable a la de **Rajoy** con **Bárcenas** (“Resiste”) o con **Camps** (“estaré contigo por delante o por detrás”)—, se ha venido posicionando ante los empresarios

agrícolas como “uno de los vuestros”; cuando la política más consecuente sería la de incentivar y abanderar el cambio en las formas de producir y la renovación en favor de una agricultura sostenible capaz de generar los mejores rendimientos económicos respetando el ecosistema. La pertenencia a la UE implica la adopción de modelos de producción que no colisionen con normativas medioambientales cada vez más estrictas. “Estar en Europa” acaba por ser la expresión de una simple retórica cuando no hay voluntad más que en términos discursivos de transformar fornas de producir bajo códigos de respeto ambiental que van más allá del simple deseo. *Gunner*, *lord* británico, pedía en la capital de España un paso más decidido para implementar nuevos modelos energéticos y de explotación más racional de los recursos. “Es como si se subvencionara a **Kodak** —afirma— para seguir produciendo material fotográfico, como en otra época, cuando las tecnologías han cambiado y es necesario buscar nuevas formas de producción alternativas”. Está claro que ninguno de esos ejecutivos puede dejar abandonados a quienes dependen económicamente de esos sectores; pero hay que tener la audacia suficiente para explicar e implementar la necesidad de cambios y la renovación de las actividades productivas, para buscar la conciliación con una política ambiental que va mucho más allá del adorno y se convierte en un elemento inseparable de los modelos de producción y de modernización de estructuras, y no solo de tecnologías.